

LA IGLESIA Y LOS ACONTECIMIENTOS DE MAYO EN EL SALVADOR

En el Mensaje de los Pueblos de América Latina los obispos reunidos en Puebla comenzaron con una dramática constatación. El espectáculo que ofrece el continente aterra por su simplicidad. "Va aumentando más y más la distancia entre los muchos que tienen poco y los pocos que tienen mucho. Los valores de nuestra cultura están amenazados. Se están violando los derechos fundamentales del hombre".

Los acontecimientos del mes de mayo en El Salvador son por ahora la más trágica ilustración de ese diagnóstico en nuestro país. La distancia entre los muchos y los pocos, gestada, fomentada y aumentada por la irracional intolerancia de los poderosos, ha explotado en una violencia desconocida hasta ahora por su magnitud. El derecho a la vida, secularmente amenazado y negado por estructuras de injusticia, se ha convertido en el destino a la muerte por masacres increíbles y venganzas selectivas.

A diferencia de situaciones anteriores, la Iglesia en cuanto tal y en sus representantes más cualificados, no ha sido directamente atacada, aunque un sacerdote fuese injustamente capturado y maltratado, dos religiosas fuesen expulsadas "equivocadamente" del país y permitidas a reingresar con veladas amenazas y la ultra-derecha haya vuelto a asomar la cabeza en la prensa con calumnias y amenazas a la Iglesia y al Arzobispo de San Salvador.

Los actores directos de la explosión de la violencia han sido los cuerpos represivos del Gobierno y los miembros del Bloque Popular Revolucionario, con actuaciones también de algún grupo guerrillero y más tardíamente de la Unión Guerrera Blanca. En esta confrontación cuyo fruto más llamativo y trágico es el casi centenar de muertos, se ha dado también el intento de polarizar al país en dos y sólo dos bandos. Por lo que toca a la Iglesia, la prensa ha pretendido burdamente recuperar las actuaciones y homilías de Mons. Romero, enunciando en sus titulares —que no correspondían al texto subsiguiente— lo que pudiera favorecer a los comunicados oficiales del Gobierno.

La prolongada toma de Catedral y las numerosas tomas de iglesias han sido también un modo indirecto de capitalizar los símbolos más obviamente eclesiales en favor del Bloque.

En esta situación lo primero que hay que recalcar es el mismo hecho de que la Iglesia de la Arquidiócesis ha actuado y ha tomado una postura ante los acontecimientos y su complejidad. No por habitual deja de tener esa actuación gran importancia. El menor conocimiento directo que la Iglesia tiene de este tipo de enfrentamientos, a diferencia de cuando ella misma ha sido directamente atacada, y la presión externa a una identificación suya con los bandos en litigio no ofrecían sino dificultades a su actuación. Sin embargo, la trayectoria de la Arquidiócesis, irreversible en atender al dolor y a los intereses de las mayorías, le han hecho de nuevo levantar su voz y ofrecer sus servicios para iluminar éticamente el conflicto y aminorar, si no solucionar, sus costos humanos.

El mero hecho de que la Arquidiócesis se haya pronunciado en esta situación cobra todo su valor si se considera el silencio de la Conferencia Episcopal —¿no ameritaba esta situación un mensaje conjunto del episcopado del país?—, el silencio de los otros Sres. Obispos con excepción del mensaje de Mons. Barrera, o la palabra de Mons. Revelo, pero sólo en el foro nacional convocado por el Gobierno, y no como palabra de Iglesia que juzga también al Gobierno.

La actuación de la Arquidiócesis ha seguido los criterios fundamentales de los dos últimos años. Clara ha sido su preocupación por la verdad, esclareciendo en los boletines del Arzobispado y ruedas de prensa la verdad de los hechos, frente a su falsificación y manipulación. Y clara ha sido su preocupación por la profundidad de la verdad. En la conferencia de prensa del 15 de mayo Mons. Romero repitió una vez más que la causa de los males violentos de mayo está en la estructura económica y política del país. "El pueblo ya no está dispuesto a seguir soportando la profunda crisis estructural que está pa-

decidiendo el país". Repitió también que la causa inmediata de la violencia está en "la captura arbitraria e ilegal de cinco dirigentes del Bloque Popular Revolucionario". Y la solución por lo tanto sólo puede estar en la transformación profunda de estructuras, y a las inmediatas en que el Gobierno libere a los tres dirigentes que aún no han sido puestos en libertad o reconozca "que subalternos han cometido el abuso de retener o asesinar a los tres líderes del B.P.R."

Ante el anunciado foro nacional, el arzobispado mantiene la postura que ha mantenido en general hacia el diálogo con el Gobierno. Que el país necesite un foro en que las diversas fuerzas sociales puedan aportar soluciones, no lo pone en duda el arzobispado; más aún ha puesto a disposición de las diversas fuerzas sociales sus medios de comunicación para tal fin. Lo que Mons. Romero reitera es que un foro nacional presentado por iniciativa del Gobierno debe ir precedido de otras iniciativas que den credibilidad a la veracidad y honradez del diálogo y que den credibilidad a que el diálogo versará realmente sobre el mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de las mayorías oprimidas. En esto Mons. Romero no es intransigente sino consecuente. No hace más que cumplir la palabra que le dio al pueblo hace algo más de dos años.

Por último ante la implantación del estado de sitio ha vuelto a repetir que tal medida no se convierta en alibi para llevar a cabo con más facilidad e impunidad atropellos y crímenes contra el pueblo.

La actuación general del arzobispado en este sangriento mes ha sido pues consecuente. La Iglesia quiere y defiende el bien de las mayorías oprimidas, ve la causa de los muchos males y de la actual violencia en la intolerable situación económica de las mayorías y en la respuesta represiva a sus intentos por ejercer presión social para salir de ella. Condena la violencia que se ha cernido salvaje e inhumanamente en forma de masacres ante gente indefensa, y condena también la venganza selectiva que grupos guerrilleros han tomado en miembros de los cuerpos de seguridad. Aun cuando sea difícil de aceptar y para algunos políticamente ineficaz, no puede menos de volver a sacar de su más profunda inspiración evangélica que sin una buena dosis de amor y de intentos de reconciliación, la situación se hace intolerable en el presente y se va introyectando la violencia como única y primordial salida a los problemas.

Si la condena de Mons. Romero ha sido clara ante las masacres de inocentes y la venganza sistematizada, también ha tomado postura ante algunas de las tácticas de presión social de que ha usado el B.P.R. como movimiento popular de masas. Debiera estar claro por una parte su apoyo a las mayorías populares y a toda organización, cristiana o no, que defienda sus legítimos intereses, conducta más que probada en palabras y hechos a lo largo de dos años.

Por otra parte ha mostrado su desacuerdo y desautorizado la prolongada toma de Catedral y la ocupación sistemática de templos como medio normal de ejercer presión social.

No deja de ser significativo que en El Salvador y a lo largo del continente los templos se han convertido frecuentemente en plataformas de reivindicaciones y protestas, en espacios de libertad y a veces en refugios contra la represión. En sociedades acosadas y sin libertad el templo representa a veces el último reducto de libertad. Esto lo sabe la Iglesia de la arquidiócesis, y sabe también que en varios casos las tomas de iglesias son breves, pacíficas, ordenadas y con respeto a lo que cristianamente significa un templo. Y esto indirectamente no deja de ser pequeño homenaje a la Iglesia.

Sin embargo Mons. Romero no acepta que la ocupación de templos pase a convertirse en táctica usual de presión social porque precisamente de esa forma a la larga se desvirtúa la presión cristiana que hoy ejercen muchas de las iglesias en el país. Que en un templo cristiano se esclarezca la verdad de las masacres, se abogue por los desaparecidos y se den listas de sus nombres, se denuncien los pecados de la sociedad, se conciente al pueblo en su verdadera dignidad de hijos de Dios y de ciudadanos es algo que semanalmente hace Mons. Romero. Que un templo cristiano sirva de refugio a heridos y acosados, que en él se velen los cadáveres de caídos y mártires es algo que siempre ha autorizado Mons. Romero. En estos casos el templo sigue manteniendo su profundo simbolismo cristiano y sigue siendo altavoz de aspiraciones e indignaciones humanas, pero dentro de los valores evangélicos, presentes en la cruz que los preside.



El pueblo cristiano capta ese significado del templo, sobre todo en situaciones conflictivas, y al templo va a mostrar su duelo y su esperanza en manifestaciones multitudinarias. Pero en la medida en que el templo pierde su simbolismo cristiano y positivamente humanitario, su ocupación se convierte en pura exhibición de poder o en centro logístico de operaciones. Y esto es lo que Mons. Romero no ha aprobado, pues de esta forma y a su juicio lo único que se consigue a la corta es exacerbar aún más la violencia y privar a la larga a la misma Iglesia del poder profético y denunciador de su palabra. La fuerza cristiana y también social de la Iglesia está en su palabra y no en mecanismos concretos de presión política, legítimos para otros grupos sociales. Querer hacer del templo ambas cosas a la vez, lugar de la denuncia cristiana y mecanismo concreto de presión política, pudiera suponer en algún caso un triunfo a la causa popular, pero a la larga sería privarle del enorme potencial concientizador y denunciador de la palabra del Obispo y del sacerdote que se pronuncia cristianamente en el templo.

Esta nos parece ser la lógica cristiana y popular de Mons. Romero, tantas veces manifestada, tan claramente expuesta en su última Carta Pastoral y mantenida también ahora en este sangriento mes de mayo. En estos momentos en que de tantas formas se trata de tergiversar y manipular la actuación de la Iglesia de la arquidiócesis no estará de más recordar la lógica que ha movido a Mons. Romero y a la cual sigue siendo fiel.

En primer lugar la Iglesia mantiene en nombre del evangelio que su relación primaria dentro de la sociedad es hacia las mayorías pobres y oprimidas. El que a ellas se les anuncie la buena noticia de su liberación y el que ésta se vaya llevando a cabo solidariamente con los pobres es fundamento irrenunciable de su misión. También en la actual situación y aun dentro de la oscuridad que situaciones nuevas y cada vez más conflictivas producen, no puede renunciar a la "opción preferencial por los pobres" de que habla Puebla o, dicho bíblicamente, a servir a la instauración del reino de Dios y no a sí misma. Independientemente por lo tanto de cómo la tergiversen o manipulen otros grupos sociales, se le reconozcan o no sus servicios, "a esta opción tampoco puede renunciar la Iglesia: a defender la causa del débil y objetivamente necesitado, cualesquiera que sean los grupos o personas que reivindiquen esas justas causas" (Tercera Carta Pastoral de Mons. Romero y Primera de Mons. Rivera).

En segundo lugar la Iglesia mantiene que en la consecución de una sociedad justa nadie debe ser excluido, si en verdad lo desea y trabaja para ello. Pero recuerda que las mayorías populares deben estar activamente presentes en esa tarea. Excluirlos no sería sólo un error político, sino la negación de que el pueblo de Dios es el llamado a construir su propio destino. Por esa razón la Iglesia ha insistido tanto en el derecho de organización de los sectores populares e "incluso animar a que existan esas organizaciones. . . con la visión cristiana de que los pobres ten-





gan suficiente fuerza para no ser víctimas de los intereses de unos pocos, como lo demuestra la historia" (*ibid.*, citado de Medellín, Paz, nn. 20 y 27). Lo que pide por lo tanto la Iglesia es la incorporación activa de las masas populares en el proceso político y la superación de sectarismos y protagonismos para que realmente sea el pueblo quien deje oír su voz.

En tercer lugar la Iglesia ve su aporte específico, que cree además insustituible, en la palabra evangélica anunciada y realizada. Se trata por lo tanto en directo de un aporte de tipo ético y profético más bien que directamente político, aun cuando ese aporte tenga repercusiones políticas. Pero no puede renunciar a lo evangélico de su aporte. Por ello, ni unos debieran acusar a la Iglesia de hacer política cuando lo que proclama es el evangelio, ni otros más impacientes debieran desilusionarse de que el aporte eclesial pasa por lo evangélico y se constituya en cuanto evangélico. La Iglesia cree en el poder del evangelio porque es la Palabra de Dios y porque esa palabra realizada en el seguimiento de Jesús produce frutos humanizadores. En la turbulencia política actual lo que la Iglesia aporta al proceso político —además de lo mencionado anteriormente— es la exigencia a humanizar el uso del poder, el cual tiende o a la opresión inmediata de las mayorías en favor de los propios intereses o está amenazado al menos de la inherente concupiscencia a dominar, aunque lo que se pretendiese en directo fuese el puro servicio. Por ello, aunque parezca inoperante, la Iglesia sigue repitiendo que ciertamente en las masacres de inocentes, pero también en la respuesta de venganza hay un germen de deshumanización que a corto o largo plazo produce frutos negativos. Esta

reafirmación de principios no la hace por ingenuidad histórica, sino por fidelidad también a la palabra del evangelio, y por convicción de que en esa palabra existe un principio humanizador aun en situaciones deshumanizadas.

La Iglesia de la Arquidiócesis ha intentado encarnar e historizar el evangelio en las nuevas situaciones y desde él juzgar y actuar. Pero las nuevas situaciones a su vez han puesto de relieve la fuerza del evangelio, su palabra de iluminación y juicio, evangelio que es difícil de mantener y fácil de manipular por la misma Iglesia. Es fácil diluirlo, aun manteniéndolo verbalmente, y caer en lo que hoy se llama "tercerismo", es decir, pronunciar una palabra verdadera, pero ahistórica y atemporal, más allá de las situaciones concretas y más allá de la ingente miseria y sufrimiento de las mayorías; pronunciar una palabra que juzgue a otros, pero no a la misma Iglesia que la proclama; proclamar una palabra generalizadora que condena todo lo malo, todo lo injusto, todo lo violento por igual, sin jerarquizar, como lo hace Medellín y la Carta Pastoral, las raíces de los males, sus responsables y sus soluciones.

Pero si la palabra del evangelio no se sustrae a la historia ni se generaliza haciéndose así inoperante, entonces esa palabra se hace voz de los sin voz, llena de espíritu la lucha por la liberación, humaniza los esfuerzos liberadores, unifica a quienes luchan por el mismo ideal y mantiene viva la esperanza en medio del cautiverio. Esa palabra es la que quiere anunciar y realizar la arquidiócesis en bien de las mayorías oprimidas en el oscuro callejón de nuestro país.

H.O.